

Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-3410-2020 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, en favor del actor, la suma de \$60.000.000.- (sesenta millones de pesos).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia de diecinueve de julio del año dos mil veintitrés, la confirmó con declaración que eleva la suma a indemnizar por concepto de daño moral a la suma a \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos).

Contra esa sentencia la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

1º) Que, la demandada, deduce recurso de casación en la forma fundado en el artículo 768 N° 5, en relación con el artículo 170 N° 4, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, e indica que la sentencia recurrida no contiene consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para aumentar la indemnización, lo que -según la recurrente- resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo que pretende anular.

Pide que se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo mediante la cual confirme la sentencia definitiva de



primera instancia en cuanto fijó para el actor una indemnización de \$60.000.000.

2°) Que, los hechos establecidos en la sentencia de primera instancia y ratificados en el fallo recurrido son los siguientes:

“5°. - Que, son hechos no controvertidos y, en consecuencia, establecidos en el proceso, que don Uldarico Leoncio Carrasco Pereira, fue reconocido como víctima por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (“Informe Valech”), figurando en este listado, bajo el número 4660, respectivamente (folio 34). Que el demandante, fue detenido, siendo sometido a prisión política, maltrato (físico y psicológico) y exilio, padeciéndose hasta el día de hoy, producto de los hechos descritos, trastorno de estrés post traumático, duelo no resuelto y depresión severa con sintomatología ansiosa, conforme al Informe Psicológico emitido por el Prais (folio 34) e Informe Psiquiátrico N°172, emitido por Servicio Médico Legal de Concepción, evacuado en el marco de la tramitación de la querella por torturas interpuesta por el actor, Rol 71-2006 de la Corte de Apelaciones (folio 43).

A mayor abundamiento, según el Informe de Prais (folio 34), emitido por la psicóloga Jennifer Arteaga Beltrán, y acompañado por el actor, se concluye por el médico tratante que, conforme a lo descrito y evaluado durante entrevistas médicas, el demandante es un paciente emocionalmente afectado por experiencias represivas, padecidas en el periodo de dictadura. Lo anterior, unido a las declaraciones de los testigos presentados por la parte demandante (folio 50), quienes están contestes en afirmar que la demandante era militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria); que, durante septiembre de 1973, perdió a su hermano en un enfrentamiento del que se siente culpable y



luego, fue detenido y torturado, para luego, ser juzgado y apresado. Luego de ello, habría sido exiliado a Suecia y actualmente, se encontraría dentro del país. Así, aparece de los antecedentes que los hechos que subyacen y originan la presente pretensión civil del demandante, son precisamente las conductas ilícitas cometidas por agentes del Estado, atentatorias contra los derechos humanos”.

3º) Que, en relación con el vicio de casación formal denunciado, es preciso destacar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales. Éstas, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *-en lo que atañe al presente recurso-* en su numeral 4º, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia;

4º) Que, el deber de fundamentación de las sentencias es esencial en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, con fecha 30 de septiembre de 1920 se dictó el Auto Acordado que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con



precisión aquéllos sobre los que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que, si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe enseguida que, una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo, agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera;

5°) Que, la exigencia de motivar o fundamentar las sentencias, no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez, lo que hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017);



6º) Que, en el mismo sentido y complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros Tratados Internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980;

7º) Que, útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o



deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250);

8º) Que, la sentencia impugnada hace un análisis de los antecedentes que los llevaron a confirmar, con declaración de elevar la suma a indemnizar por concepto de daño moral, señalando en su motivo decimoséptimo lo siguiente: *“Que, lo anterior conduce a concluir, mediante la utilización de un procedimiento lógico de inferencia, que el sufrimiento de Uldarico Leoncio Carrasco Pereira, tanto en su sensibilidad física como psicológica, hubo de ser de bastante envergadura, por lo que la indemnización por el daño moral demandado habrá de fijarse en una suma superior a la determinada en primera instancia, dado que la misma se estima exigua frente a todo lo señalado, y en ausencia de parámetros legales, ella se fijará prudencialmente en la suma de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000), tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjeron los hechos y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado”*.

9º) Que, así formulada la argumentación, no constituye una omisión de los razonamientos denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.



La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que, para una adecuada resolución del asunto, era imperativo analizar los perjuicios producidos en el demandante, como consecuencia de la detención, la extensión de esta, las torturas sufridas y su posterior exilio. La controversia planteada versaba, por lo tanto, sobre los daños que, con su actuar, causaron los agentes estatales al demandante;

10°) Que, de lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales. Sin embargo, dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que sólo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimara la causal de nulidad formal en análisis, por tal razón el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de diecinueve de julio del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa 1830-2022 Civil acumulada a la causa Rol 1831-2022 Civil, la **que no es nula**.



Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Rol N° 195.245-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Suplente Sr. Contreras y el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su periodo de suplencia y por estar ausente, respectivamente.



En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

